

# **La libertad de expresión y el derecho al honor en la jurisprudencia interamericana en relación con la función pública y contextos electorales**

**Mtro. Alfonso Roiz Elizondo<sup>1</sup>**

## **Resumen**

*El trabajo tiene como objetivo analizar la interacción entre el derecho fundamental de libertad de expresión con el derecho a la honra o reputación de las personas, ambos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. El estudio se centrará en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que se evalúa la convencionalidad de los límites de la libertad de expresión como resultado de regulaciones y actuaciones nacionales que buscan proteger el derecho a la honra o reputación de las personas.*

*Se identificarán los diversos criterios o líneas jurisprudenciales en torno a esta interacción de derechos, así como su estabilidad y sus variantes o elementos contradictorios.*

*Para ello, la libertad de expresión como variable dependiente; será analizada con dos variables independientes, la primera, el derecho al honor asociado a la estima y valía propia; y la segunda, el derecho a la reputación relacionado con la opinión que una persona tiene sobre otros individuos.*

*Se concluye con la exposición de diversas reflexiones e inquietudes vinculadas con los fallos interamericanos estudiados en la presente ponencia.*

---

<sup>1</sup> Consejero del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana Nuevo León y Profesor de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Metropolitana de Monterrey. Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Máster en Cuestiones Contemporáneas sobre Derechos Humanos por la Universidad Pablo de Olavide. Correo electrónico: [aroiz@ceenl.mx](mailto:aroiz@ceenl.mx)

**SUMARIO:** 1. Introducción. 2. La libertad de expresión y el derecho a la honra. 3. La libre expresión en el debate público. 4. Controversias sobre la libertad de expresión y el derecho al honor. 4.1. Estándar de veracidad. 4.2. Convencionalidad de la sanción impuesta. 4.2.1. Requerimientos de la tipicidad penal. 4.2.2. Uso excepcional de la vía penal. 5. Conclusiones. 6. Bibliografía.

**Palabras clave:** Libertad de expresión; Líneas jurisprudenciales; Derecho al honor; Reputación.

## 1. Introducción

Una idea ampliamente aceptada por los tribunales y la academia se refiere a que la libertad de expresión es un derecho fundamental necesario para la eficacia de otros derechos básicos, así como para la subsistencia misma de la sociedad democrática. Es un instrumento para denunciar y hacer frente a los abusos del poder que pongan en riesgo otras libertades (TEDH, 1976: 18; CORTE IDH, 1985: 28; COTARELO, 1998:7).

Pensemos, por ejemplo, en el ámbito político y la necesaria permisión de manifestaciones críticas a los gobiernos en turno, con exigencias de rendición de cuentas, protestas o movilizaciones a través de las diversas vías y formas que se tengan al alcance. Por el contrario, cuando hay censura o represalias a esas expresiones de la sociedad, pueden advertirse acciones propias de un autoritarismo o tiranía, como ha sucedido en lugares como Nicaragua (VALLE OROZCO, 2010:163-182).

Y es justamente por su importancia democrática que cualquier conflicto con otros derechos debe ser ponderado cuidadosamente, sin descartar *a priori* la relevancia de los últimos (FAÚNDEZ, 2004:175). Es un derecho de carácter elemental y preeminente, pero no es absoluto, tiene ciertas restricciones<sup>2</sup>, como el respeto a los derechos de terceros y la reputación de los demás.

---

<sup>2</sup> Contenidas en diversos instrumentos jurídicos tanto internacionales como nacionales, tales como: la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13.2.; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19.3, y en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Derivado de la necesidad de proteger esos otros derechos, en las legislaciones nacionales se ha contemplado la posibilidad de sancionar o castigar las expresiones que resulten en afectaciones a la honra o la reputación de las personas. No obstante, estas sanciones podrían resultar excesivas si no abonan a mantener un ambiente equilibrado entre la difusión de ideas en el contexto de un debate público y la protección de intereses particulares.

Con ello en cuenta, este trabajo centra su análisis en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CORTE IDH) que evalúan precisamente la convencionalidad de las regulaciones y actuaciones nacionales en torno a la interacción de la libertad de expresión y el derecho a la honra o la reputación de las personas.

## **2. La libertad de expresión y el derecho a la honra**

La CORTE IDH (1985: 9) ha sido consistente en señalar que la libertad de expresión tiene una doble dimensión. Por una parte, la individual, en tanto faculta a las personas a expresar sus pensamientos, ideas, opiniones, informaciones o mensajes, y por otra, la social que permite a la sociedad en su conjunto buscar y recibir tales pensamientos, ideas, opiniones, mensajes e informaciones.

Bajo esa perspectiva, su evaluación con respecto a otros derechos ha de tener en cuenta precisamente esta doble dimensión. No se trata solamente de sopesar dos derechos individuales, sino una posible incidencia en temas que trasciendan a intereses sociales o públicos.

En cuanto al derecho al honor, se ha señalado que se relaciona con la estima y valía propia, en tanto la reputación alude a la opinión que otros tienen respecto de una persona (CORTE IDH, 2009: 17).

### **3. La libre expresión en el debate público**

La naturaleza pública o privada de la información difundida es un aspecto crucial por observar en los casos de acotaciones a la libre expresión. El umbral de protección es especialmente amplio para la circulación de ideas cuando se insertan en el debate público entendido como el escenario donde las acciones individuales y colectivas impactan en la esfera del interés colectivo, lo que ocurre, entre otros casos, cuando se alude a los funcionarios públicos.

Siguiendo el razonamiento en el peritaje rendido por Catalina Botero en el caso Álvarez Ramos contra Venezuela (CORTE IDH, 2019: 24), resalta que una nota o información pertenece al debate público cuando concurren tres elementos a destacar:

- i) Subjetivo: que la persona sea funcionaria pública en la época relacionada con la denuncia realizada por medios públicos;
- ii) Funcional: que la persona haya ejercido como funcionario en los hechos relacionados; y
- iii) Material: que el tema tratado sea de relevancia pública.

Al respecto, se ha sostenido que el funcionariado público debe tener un mayor umbral de tolerancia con respecto de las críticas y/o alusiones a su persona, pues al estar en el servicio público se exponen voluntariamente a un escrutinio más exigente de parte de la sociedad, en tanto que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público.

Por supuesto, ello no supone privarles por completo de sus derechos, sino que el respeto de su honor, en todo caso, debe evaluarse en un entorno de pluralismo democrático (CORTE IDH, 2007: 70), en el que la circulación de información es clave para que la sociedad pueda vigilar y exigir cuentas a quienes desempeñan actividades de orden público.

No ocurre lo mismo, por supuesto, con las expresiones que afecten el honor o reputación de personas que se desarrollan en un ámbito privado o particular. De ahí la importancia de revisar, primero, la naturaleza de los dichos o manifestaciones, a efecto de

determinar el grado de protección a la libre circulación de ideas que debe resistir o no la persona cuyo honor se haya intentado proteger o reivindicar con la aplicación de una sanción.

#### **4. Conflictos entre la libre expresión y el derecho al honor**

Para salvaguardar otros derechos, como el del honor, ante un eventual ejercicio abusivo de la libre expresión, se han establecido en las leyes nacionales responsabilidades ulteriores mediante algunas figuras jurídicas como la calumnia, la difamación o las injurias, con las cuales se trata de establecer limitantes legítimas a esa libertad.<sup>3</sup>

No obstante, para que tales restricciones sean válidas de acuerdo con los estándares convencionales, deben cumplirse tres requisitos (CORTE IDH, 2004a: 68), a saber:

I. Deben estar expresamente fijadas por la ley;

II. Deben estar destinadas a salvaguardar los derechos o la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o moral pública;

III. Deben ser necesarias en una sociedad democrática.

Pues bien, CORTE IDH ha tenido oportunidad de evaluar estas limitantes en al menos nueve ocasiones. Se trata de sentencias que datan de 2004, que derivan de acusaciones o sanciones con motivo de expresiones que en el ámbito interno se estimaron constituían un agravio injustificado al derecho a la honra o reputación. Enseguida se presenta un cuadro sobre tales casos:

---

<sup>3</sup> Como aclaración metodológica, cabe señalarse que, más allá de las diferencias conceptuales entre unas y otras, se evalúan en conjunto, en atención a que en todos esos casos se trata de proteger el derecho a la honra o reputación frente un posible ejercicio abusivo de la libertad de expresión.

**Cuadro 1. Casos sobre libertad de expresión y derecho a la honra**

	<b>Caso</b>	<b>Año</b>	<b>Estándar de veracidad</b>	<b>Convencionalidad de la sanción</b>
<b>1</b>	<b>Herrera Ulloa vs Costa Rica</b>	<b>2004</b>	<b>X</b>	
<b>2</b>	<b>Ricardo Canese vs Paraguay</b>	<b>2004</b>	<b>X</b>	
<b>3</b>	<b>Kimel vs Argentina</b>	<b>2008</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>4</b>	<b>Tristán Donoso vs Panamá</b>	<b>2009</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>5</b>	<b>Usón Ramírez vs Venezuela</b>	<b>2009</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>6</b>	<b>Mémoli vs Argentina</b>	<b>2013</b>		<b>X</b>
<b>7</b>	<b>Álvarez Ramos vs Venezuela</b>	<b>2019</b>		<b>X</b>
<b>8</b>	<b>Palacio Urrutia vs Ecuador</b>	<b>2021</b>		<b>X</b>
<b>9</b>	<b>Moya Chacón vs Costa Rica</b>	<b>2022</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Fuente: Elaboración propia con base en las sentencias de la CORTE IDH (2004a y b, 2008, 2009a y b, 2013 y 2019).

En el cuadro anterior se presentan dos grandes rubros en que podemos clasificar estas resoluciones. Se trata esencialmente de dos enfoques de estudio como se han abordado las violaciones alegadas. Por un lado, se ha evaluado el estándar de veracidad exigible respecto de las expresiones y, por otra parte, se ha pronunciado sobre la convencionalidad de las sanciones que se imponen e, incluso, en algunos casos sin entrar a revisar el contenido de las manifestaciones.

En algunos asuntos se han empleado ambas formas de abordar la problemática y en otras se han limitado a presentar una de ellas. Para este trabajo, las describimos y comentamos en apartados separados para delinear las particularidades propias de cada una. Veamos.

#### **4.1. Estándar de veracidad**

En un primer momento, con el fallo Herrera Ulloa contra Costa Rica, se enfocó el análisis al contenido mismo de las expresiones que habían provocado la imposición de una sanción penal. A partir de ello, determinó que exigir un estándar de veracidad para la difusión

de la información implica una restricción excesiva a la libertad de expresión, especialmente porque el denunciante era un periodista.

En el caso, el señor Herrera Ulloa, periodista del diario “La Nación”, fue condenado penalmente al pago de una multa por incurrir en el delito de difamación. La conducta castigada se refirió a la publicación de diversos artículos en los que hacía alusión a otras notas de periódicos de Bélgica sobre el señor Félix Przedborski, entonces Embajador de Costa Rica ante la Organización de Energía Atómica. Los periódicos involucraban al diplomático Przedborski en un negocio de comisiones ocultas por la venta de helicópteros de combate.

Al respecto, se señaló que los funcionarios públicos u otras personas que desarrollan actividades de naturaleza pública deben tener un mayor grado de tolerancia respecto de las manifestaciones o críticas recibidas, en tanto forman parte del debate público que debe protegerse para impulsar el pluralismo informativo necesario en una sociedad democrática.

En esa tesitura, se observó que el periodista Ulloa se limitó a la reproducción de informaciones que atañían al debate público. Por tanto, haberlo declarado culpable por no acreditar la “veracidad” de los hechos de los que daba cuenta, constituía una restricción excesiva a la libertad de expresión. Este tipo de exigencias pueden generar un efecto disuasivo, atemorizador e inhibitor sobre aquellas personas que ejercen la profesión de periodista, lo que, a su vez, impida el debate público sobre temas de interés de la sociedad.

Ahora bien, si no es exigible que la información divulgada sea veraz, ¿es acaso que se puede difundir cualquier tema aunque sea falso?

Para 2008, con el caso Kimel contra Argentina, se matizó esta idea, se consideró que, si bien no es exigible la veracidad o exactitud, lo cierto es que resulta válido requerir equidad y diligencia en la confrontación de las fuentes y la búsqueda de información. Con ello se salvaguarda el derecho de las personas a no recibir una versión manipulada de los hechos y,

respecto de los periodistas, aclara que tienen el deber de tomar alguna distancia crítica en cuanto a sus fuentes y contrastarlas con otros datos relevantes (CORTE IDH, 2008:20).

Recientemente, en el caso Moya Chacón contra Costa Rica se consideró también el elemento de intencionalidad en la difusión de la información. Se estableció que, a pesar de la probada inexactitud de lo divulgado, no se advertía un ánimo de infligir un daño particular. No obstante, no hay mayor pronunciamiento al respecto y se continúa con el mismo criterio en torno a que es exigible un mínimo de diligencia, sin que pueda traducirse en un control riguroso de la labor de prensa.

En este punto, es factible concluir que se ha definido una cierta línea jurisprudencial en torno a dos ideas. Por un lado, en un contexto de debate público sería excesivo castigar a alguien (sobre todo a un periodista) solo porque no acredite la veracidad de las expresiones que hubiere difundido. Por otra parte, sí es exigible un estándar de mínima diligencia en relación con la verificación de las fuentes y la contrastación de la información que se divulga, por lo que sería válido sancionar ante la omisión de un cuidado básico o elemental.

#### **4.2. Convencionalidad de la sanción impuesta**

Como puede apreciarse en el cuadro que se revisó con anterioridad, a partir de 2008 la CORTE IDH ha enfocado su análisis en revisar la convencionalidad de la sanción impuesta, lo cual, en principio, podría ser suficiente para conceder o negar que se violentó la libre expresión. En tres de los casos señalados, se ha limitado a revisar el castigo aplicado y ahí ha detenido el estudio, por otra parte en cuatro se extendió a pronunciarse también sobre la ya comentada exigencia de veracidad.

El tema de la sanción impuesta ha sido abordado a su vez desde dos perspectivas. Primero, se analizó en relación con la descripción del tipo penal para determinar si era o no lo suficientemente precisa. Luego, se revisó desde la perspectiva de la proporcionalidad de la sanción, o mejor dicho, de la materia penal como vía para castigar.



#### 4.2.1. Requerimientos de la tipicidad penal

En dos de los primeros casos, Kimel contra Argentina y Usón Ramírez contra Venezuela, el examen que realizó la CORTE IDH se circunscribió a evaluar si se respetaban los requerimientos de la tipicidad penal en cuanto a que la descripción del delito fuera expresa, precisa, taxativa y previa.

En ambos asuntos se resolvió la inconveniencia de la restricción al observarse una deficiente regulación penal, pues la conducta ilícita tenía una formulación ambigua. Particularmente, en el segundo asunto mencionado, el delito se describía en los términos siguientes: *“incurrirá en la pena de tres a ocho años de prisión el que en alguna forma injurie, ofenda o menosprecie a las Fuerzas Armadas Nacionales o alguna de sus unidades”*.

En ese sentido, destacó la omisión de especificar los elementos de injuria, ofensa o menosprecio; faltó especificar si era relevante o no la imputación de hechos que atenten al honor o basta una mera opinión ofensiva o menospreciante y, finalmente, señaló que debía tomarse en cuenta el dolo específico de causar descrédito o afectación a la buena fama o prestigio.

Se trató, pues, de precisar el ámbito típico de la conducta delictiva como una forma de limitar el arbitrio de la autoridad y evitar interpretaciones amplias o subjetivas, lo que trae como consecuencia un mayor campo de libertad en las expresiones.

La parte criticable de esta línea jurisprudencial es que en el primero de los precedentes en que se siguió este criterio, la propia CORTE IDH se limita en los argumentos para condenar la violación aducida. Esto es, reproduce el texto de los delitos de injuria y calumnia (*“el que deshonrar o desacreditar a otro, será reprimido con multa [...]”* y *“La calumnia o falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción pública, será reprimida con prisión [...]”*) y menciona las exigencias de la tipificación penal, más no abunda en señalar específicamente las razones por las que esas formulaciones son imprecisas, vagas o ambiguas.

Es decir, es cierto que no se cumplen con los requerimientos de tipicidad, basta leer los textos citados, pero justamente si lo que es motivo de condena es una imprecisión, debió

evitar caer nuevamente en otra imprecisión. Para ello, tendría que haberse realizado un esfuerzo argumentativo mayor para indicar con claridad la falta de elementos, las diversas interpretaciones plausibles y la consecuente posibilidad de incurrir en arbitrariedades, como sí se logra relatar en el otro caso que se dictó posteriormente.

#### **4.2.2. Uso excepcional de la vía penal**

La CORTE IDH ha establecido que no puede descartarse el uso de la persecución penal por una eventual afectación indebida al honor de las personas, pero simultáneamente, ha enfatizado que el derecho penal es la vía con las medidas más restrictivas a la libertad de expresión, por lo que aclara que su uso debe ser excepcional y reservarse a salvaguardar una “necesidad social imperiosa”.

Así, en tres de los casos analizados, se quedó solo en este plano de estudio, pues se limitó a revisar la validez o no de la vía penal para sancionar los agravios que pudieran suscitarse al honor de las personas.

De manera precisa, no verificó propiamente el contenido de las expresiones para determinar cuál derecho debía prevalecer, sino que se estableció un criterio muy concreto: la persecución penal no es una vía convencionalmente válida para proteger el honor del funcionariado público frente a la libertad de expresión. Se trata de una clara línea de jurisprudencia que se ha reiterado ya en un par de ocasiones (CORTE IDH, 2019: 25 y 2021: 42).

Mención aparte merece el caso Valle Jaramillo contra Colombia de 2008. Se trataba de un defensor de derechos humanos que denunciaba arbitrariedades de grupos paramilitares en convivencia con miembros de la fuerza pública. Fue denunciado por el delito de calumnias por un funcionario público, pero esa persecución penal no siguió su curso, debido a que fue asesinado y de hecho, por esa razón se condenó internacionalmente al Estado.

En ese lamentable caso, se resolvió que la denuncia o inicio de un proceso penal no era motivo suficiente para estimar que se vulneraba la libertad de expresión, pues se

argumenta que condenar por esa razón “conllevaría una exclusión de plano de la solución de tales litigios por la vía contenciosa”.

En los precedentes comentados, se pueden identificar al menos dos interpretaciones: 1) Se ha superado el criterio anterior y la persecución penal no es convencionalmente válida para proteger el derecho al honor de los funcionarios, y 2) Ambos criterios pueden coexistir, es válido iniciar el proceso penal y solo sería inconvencional ante una condena definitiva en la vía penal.

Bajo esta óptica, la segunda interpretación sería lamentable y debe desecharse. Esto es, la inconvencionalidad de la vía penal, no ha de limitarse a las condenas, sino que abarca también el inicio y el desarrollo de una persecución penal, pues, precisamente la severidad de esas actuaciones es lo que pretende evitarse, por el efecto de amedrentamiento que produciría a quienes quisieran denunciar actos de corrupción o abusos de autoridad.

Ahora bien, aunque hay un lapso de diez años entre las sentencias mencionadas, lamentablemente en las más recientes no se hace un posicionamiento en que se deje firmemente que se trata de un nuevo razonamiento y que se ha superado el anterior, a fin de que no se haga una interpretación errónea, que es la coexistencia de dos criterios contradictorios.

Como un caso con notas diferentes tenemos a la sentencia de Mévoli contra Argentina. A diferencia de los anteriores, se trataba de un conflicto entre particulares, en el que una persona acusaba algunas irregularidades en las actividades comerciales de una asociación. En los tribunales argentinos se había condenado penalmente a quien profirió expresiones que se estimaron injuriosas.

Para estos asuntos, se advirtió que no se trataba de información que tuviera que ver con funcionarios o figuras públicas ni versaban sobre el funcionamiento de instituciones del Estado, de tal manera que no podía estimarse que se trataba de un discurso de interés público.

En tal virtud, se estimó que no era aplicable el mismo criterio que se explicó en párrafos anteriores, por lo que no se condenó al Estado. En ese sentido, la línea jurisprudencial para estas situaciones podría sintetizarse señalando que sí es factible la aplicación de sanciones penales cuando las expresiones que provoquen una afectación al derecho al honor se deriven de un conflicto entre particulares.

## **5. Conclusiones**

En principio, se considera que las decisiones tomadas por la CORTE IDH tienden a garantizar la libre expresión de ideas y opiniones, sobre todo en asuntos de interés público, con un estándar razonable de exigencia de veracidad o exactitud de la información divulgada y reduciendo al máximo la posibilidad de imponer sanciones penales.

En el desarrollo de este trabajo se han identificado al menos cuatro claras líneas jurisprudenciales para situaciones específicas en la interacción de la libertad de expresión y el derecho al honor, en un contexto de discusión pública, a saber:

- La falta de veracidad o exactitud de las expresiones difundidas solamente debe sancionarse cuando hay una evidente falta de cuidado en la corroboración de las fuentes y la constatación de la información (estándar mínimo de veracidad).
- Los tipos penales que castiguen la afectación al honor deben contemplarse de forma expresa, precisa, taxativa y previa.
- La vía penal no es convencionalmente válida para proteger el derecho al honor de los funcionarios o figuras públicas.
- Es factible la aplicación de sanciones penales cuando la información divulgada se relacione con aspectos de carácter particular o privado.

Como ya se explicó, se ha detectado también una aparente contradicción, o bien, un cambio de criterio en torno a la posibilidad de iniciar una persecución penal con motivo de expresiones que afecten el honor de funcionarios públicos. Antes se decía que era válido el comienzo de una indagatoria penal, pero con los nuevos criterios, parecería que incluso la fase inicial debería estimarse inconvencional.

En adición, es relevante resaltar que la CORTE IDH podría acercarse más o de plano adoptar plenamente la doctrina de real malicia o malicia efectiva que se ha adoptado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para resolver los casos en los que analiza la veracidad de las expresiones denunciadas.

Recordemos la emblemática sentencia New York Times contra Sullivan resuelta por la Corte Suprema de Estados Unidos de América (CORTE SUPREMA DE EU), de gran influencia a nivel internacional. En esa sentencia emblemática, se estableció que para acreditar la real malicia era necesario que se comprobara el conocimiento de la falsedad (CORTE SUPREMA DE EU, 1964: 20).

La CORTE SUPREMA DE EU acuñó el término “real malicia o actual malice”, para establecer que un funcionario público que reclame indemnización por daños y perjuicios derivada de una falsedad difamatoria, relacionada con su función oficial, debe probarse que esta se efectuó con real malicia. Lo anterior significó una sólida protección para las garantías consagradas en la Primera Enmienda, pues le otorgó un papel preponderante al debate sobre las actividades de los funcionarios públicos (FILIPETTO, 1996: 213).

Asimismo, es relevante considerar el término “esperanza legítima”, que usa el TEDH en casos como el de Rubio Dosamantes contra España. Si bien se refiere a aspectos relacionados con la vida privada de las personas públicas, lo cierto es que establece algunas directrices que podrían ser de utilidad en relación con el derecho al honor de funcionarios públicos (TEDH, 2017: 7).

En ese caso, la conocida cantante Paulina Rubio Dosamantes demandó a diversas personas físicas y productoras de cadenas de televisión derivado de algunos comentarios sobre su vida y preferencias sexuales en varios programas de televisión, los cuales estimó que vulneraban su derecho al honor y al respeto de su vida privada.

El TEDH razonó que en algunas circunstancias, una persona incluso conocida en el medio público puede invocar una “esperanza legítima” de protección y respeto de su vida

privada (TEDH, 2017:10), sobre todo cuando la información que se divulga solo parece tener como objetivo satisfacer la curiosidad de cierto público sobre detalles íntimos, sin tener un real aporte a la discusión de temas de interés general.

En esta lógica, la *esperanza legítima de protección* puede representar una guía para sentar las bases de la protección del derecho al honor o a la vida privada de las personas que se dedican a actividades de interés general, para casos en que la información divulgada tiene una evidente intrascendencia o morbosidad, sin contribuir a un pluralismo informativo en el marco democrático.

Se trata, pues, de una línea muy delgada que hay que atender con sumo cuidado. Por una parte, tenemos la necesidad de maximizar la libre expresión de ideas y la difusión de información de interés público y, por otra parte, encontramos la obligación de salvaguardar el derecho al honor o reputación de las personas. Se espera que se puedan aprovechar las especificidades de los casos para delimitar con mayor detalle los límites entre lo prohibido y lo permitido, con base en directrices y referencias ejemplificativas para apreciar la debida diligencia o la total despreocupación en el marco del debate público.

## 6. Bibliografía

- Convención Americana sobre Derechos Humanos. 1978. San José de Costa Rica. 18 de julio. Disponible en <http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D1BIS.pdf>
- CORTE IDH. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 1985. La Colegiación Obligatoria de Periodistas. Opinión Consultiva OC-5/85 (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos) 13 de noviembre de 1985. Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea\\_05\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf).
- \_\_\_\_\_. 2004b. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, Sentencia (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) 2 de julio de 2004. Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_107\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.pdf)
- \_\_\_\_\_. 2004b. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, Sentencia (Fondo, Reparaciones y Costas) 31 de agosto de 2004. Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_111\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_111_esp.pdf)

- \_\_\_\_\_. 2008. Caso Kimel contra Argentina, Sentencia (Fondo, Reparaciones y Costas) 2 de mayo de 2008. Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_177\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_esp.pdf)
- \_\_\_\_\_. 2009a. Caso Tristán Donoso contra Panamá, Sentencia (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas) 27 de enero de 2009. Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_193\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_193_esp.pdf)
- \_\_\_\_\_. 2009b. Caso Usón Ramírez contra Venezuela, Sentencia (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas) 20 de noviembre de 2009. Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_207\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_207_esp.pdf)
- \_\_\_\_\_. 2013. Caso Mévoli contra Argentina, Sentencia (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) 22 de agosto de 2013. Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_265\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_265_esp.pdf)
- \_\_\_\_\_. 2019. Caso Álvarez Ramos contra Venezuela, Sentencia (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas) 30 de agosto de 2019. Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_380\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_380_esp.pdf)
- \_\_\_\_\_. 2021. Caso Palacio Urrutia y Otros contra Ecuador, Sentencia (Fondo, Reparaciones y Costas) 24 de noviembre de 2021. Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_446\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_446_esp.pdf)
- \_\_\_\_\_. 2022. Caso Moya Chacón y Otro contra Costa Rica (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) 23 de mayo de 2022. Disponible en: [https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_451\\_esp.pdf](https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_451_esp.pdf)
- CORTE SUPREMA DE EU. 1964. Corte Suprema de Estados Unidos de América. “New York Times Co. v. Sullivan”. Sentencia de 9 de marzo de 1964. Estados Unidos de América. Disponible en: <https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep376/usrep376254/usrep376254.pdf>
- Cotarelo, Ramón 1998. “La libertad de expresión y la Constitución”. Memoria del simposio internacional. El significado actual de la Constitución. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Faúndez Ledesma, Héctor. 2004. Los límites de la libertad de expresión. México. UNAM.
- Filipetto, M. V. 1996. “Difamación y real malicia en EE.UU. y Argentina: reseña y comparación”. Lecciones y Ensayos, Vol. 66. Argentina: Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. Disponible en: [http://repositorioubi.sisbi.uba.ar/gsd/collect/pderecho/lecciones/index/assoc/HWA\\_1675.dir/1675.PDF](http://repositorioubi.sisbi.uba.ar/gsd/collect/pderecho/lecciones/index/assoc/HWA_1675.dir/1675.PDF)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 1966. Nueva York, Estados Unidos de América, 16 de diciembre de 1966. Disponible en: <http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D47.pdf>.

- TEDH. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 1976. Caso Handyside v. The United Kingdom. Sentencia de 7 de diciembre de 1976. Disponible en: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57499>
- \_\_\_\_\_. 2017. Caso Rubio Dosamantes contra España. Sentencia de 21 de febrero. Disponible en [https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaInternacional/TribunalEuropeo/Documents/1292428354199-Sentencia\\_RUBIO\\_DOSAMANTES\\_c\\_Espa%C3%B1a.pdf](https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaInternacional/TribunalEuropeo/Documents/1292428354199-Sentencia_RUBIO_DOSAMANTES_c_Espa%C3%B1a.pdf)
- Valle Orozco, Dayra. 2010. “Criminalización de la protesta social en Nicaragua como forma de restricción de la libertad de expresión”. Bertoni, Eduardo Andrés (comp.). ¿Es legítima la criminalización de la protesta social?: Derecho Penal y libertad de expresión en América Latina. Argentina: Universidad de Palermo. Disponible en: [https://www.palermo.edu/Archivos\\_content/derecho/pdf/libro-bertoni.pdf](https://www.palermo.edu/Archivos_content/derecho/pdf/libro-bertoni.pdf)